

Spanish version:

La violencia en Cúcuta exige garantías urgentes para la libertad de prensa en la frontera

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Free Press Unlimited (FPU) rechazan la grave situación de violencia que se vive en Cúcuta. Norte de Santander y su capital enfrentan una grave situación de violencia que compromete la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Las amenazas y agresiones contra la prensa requieren una respuesta urgente y coordinada del Estado, que permita prevenir nuevos ataques y garantizar que los periodistas puedan informar sin temor a represalias.

Un entorno de alto riesgo

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía, el 26 de octubre, y el atentado con explosivos ocurrido al día siguiente en el sector de El Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, evidencian la gravedad de la violencia que enfrenta la ciudad. Estos hechos afectan a la población y agravan el entorno en el que los periodistas deben cubrir asuntos de alto interés público.

La presencia de grupos armados y estructuras criminales, las disputas por el control territorial y las economías ilegales configuran un escenario especialmente adverso para la prensa. Investigar la corrupción, las relaciones entre poderes locales y criminalidad, el narcotráfico o la inseguridad implica riesgos que pueden limitar la cobertura y favorecer el silenciamiento de asuntos que la ciudadanía necesita conocer.

La violencia contra el periodismo tiene antecedentes concretos. En lo que lleva corrido del año 2026, la FLIP documentó 52 agresiones en Norte de Santander, incluidas 30 amenazas (57.69%). El asesinato de Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio de este año, se suma al de Jaime Vásquez, en abril de 2024. Cristian había enfrentado reiterados ataques y contaba con un esquema de protección que resultó insuficiente para proteger su vida. Estos casos exigen esclarecer las responsabilidades y revisar la eficacia de las medidas de prevención y protección.

A estos riesgos se suman las limitaciones de recursos de los medios locales, que dificultan el acceso a herramientas de seguridad, acompañamiento jurídico y apoyo psicosocial. Las respuestas institucionales deben reconocer estas condiciones y las particularidades del territorio: la protección de la prensa requiere atender tanto los riesgos individuales como el entorno que permite que las agresiones se repitan.

La reiteración de las agresiones contra la prensa demuestra que las autoridades deben actuar antes de que los riesgos se materialicen en nuevos ataques. Las amenazas no pueden tratarse como hechos aislados ni la respuesta estatal limitarse a la asignación de esquemas de seguridad. Se requiere una estrategia articulada que atienda las causas del riesgo, permita investigar a quienes buscan silenciar al periodismo y garantice que los medios puedan seguir informando. La falta de una respuesta efectiva deja expuestos a los periodistas y favorece la autocensura en un momento en el que la ciudadanía necesita más información sobre lo que ocurre en su territorio.

Nuestro llamado

La gravedad de la violencia en Cúcuta y Norte de Santander exige que las autoridades actúen de manera urgente y coordinada. Los anuncios y los consejos de seguridad deben traducirse en acciones que permitan a los periodistas continuar su trabajo sin poner en riesgo su vida. Por ello:

- **Solicitamos al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a la Alcaldía de Cúcuta adoptar e implementar un plan urgente de prevención y protección para la prensa**, en coordinación con la UNP y con participación de periodistas y medios locales. Este debe contar con responsables, recursos y plazos definidos, una ruta de respuesta inmediata frente a amenazas y mecanismos públicos de seguimiento que preserven la información sensible de las personas en riesgo. Las autoridades no pueden esperar a que ocurra otro asesinato para responder a los riesgos que ya conocen.
- **Instamos a la Unidad Nacional de Protección revisar de manera prioritaria los casos de periodistas en riesgo en la región y garantizar medidas oportunas e idóneas.** Las evaluaciones deben incorporar el contexto territorial, los antecedentes de violencia y las condiciones en las que se realizan las coberturas. La asignación de un esquema no agota la obligación de protección: es necesario verificar su eficacia, corregir sus fallas y ajustarlo cuando cambien las condiciones de riesgo.
- **Pedimos a la Fiscalía General de la Nación resultados en el esclarecimiento de los asesinatos, amenazas y demás agresiones contra la prensa.** Las investigaciones deben considerar como hipótesis prioritaria la relación de los ataques con el trabajo periodístico y avanzar en la identificación de quienes los ejecutan, ordenan y financian. La respuesta judicial debe permitir establecer si existen conexiones entre las agresiones y desarticular las estructuras que buscan silenciar a la prensa.
- **Instamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos de prevención y protección.** Solicitamos que, en el marco de sus competencias, verifiquen la respuesta a las alertas y denuncias, identifiquen demoras u omisiones y promuevan las actuaciones correspondientes para evitar que la descoordinación institucional siga dejando expuestos a los periodistas.
- **Urgimos a las autoridades civiles y a la fuerza pública garantizar condiciones seguras para cubrir los hechos de violencia y respetar la independencia periodística.** Esto implica abstenerse de estigmatizar a quienes informan, evitar restricciones arbitrarias a las coberturas y no exponer a periodistas ni a sus fuentes mediante la divulgación de información sensible.

Convocamos también a la comunidad internacional y a los organismos de cooperación a mantener un acompañamiento sostenido a la prensa de la frontera, respaldar la protección y sostenibilidad de los medios locales y hacer seguimiento a la respuesta institucional. Este apoyo debe complementar, sin sustituir, las obligaciones del Estado colombiano

Por qué esto importa

La violencia contra la prensa tiene consecuencias para toda la ciudadanía. Cuando un periodista es amenazado, asesinado u obligado a dejar de cubrir un tema, se restringe la información disponible sobre las decisiones públicas, las dinámicas de violencia y las actuaciones de quienes ejercen poder en el territorio.

En un contexto como el que atraviesa Cúcuta, el periodismo es indispensable para comprender lo que ocurre y exigir respuestas a las autoridades. El miedo no puede decidir qué se publica ni qué puede conocer la ciudadanía.

Proteger a quienes informan exige acciones sostenidas de prevención, protección y acceso a la justicia. Los periodistas de Cúcuta y Norte de Santander deben poder ejercer su labor sin poner en

riesgo su vida, y la ciudadanía debe contar con información plural e independiente sobre su territorio.

English version:

Violence in Cúcuta Demands Urgent Guarantees for Press Freedom on the Border

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) and Free Press Unlimited (FPU) condemn the serious situation of violence in Cúcuta. Norte de Santander and its capital are facing a grave wave of violence that endangers the lives and safety of those who practice journalism, as well as the public's right to be informed. The threats and attacks against the press require an urgent, coordinated response from the State, one that prevents new attacks and ensures that journalists can report without fear of reprisals.

A High-Risk Environment

The killing of Miguel Castellanos, former Secretary of Government of Cúcuta and mayoral pre-candidate, on October 26, and the explosive attack the following day in the El Escobal area, near the Francisco de Paula Santander International Bridge, show the severity of the violence the city is experiencing. These events affect the population and worsen the environment in which journalists must cover matters of high public interest.

The presence of armed groups and criminal structures, disputes over territorial control, and illegal economies create an especially hostile setting for the press. Investigating corruption, the links between local power and crime, drug trafficking, or insecurity entails risks that can limit coverage and enable the silencing of issues the public needs to know about.

Violence against journalism has concrete precedents. So far in 2026, FLIP has documented 52 attacks in Norte de Santander, including 30 threats (57.69%). The killing of Cristian Herrera on June 6 of this year follows that of Jaime Vásquez in April 2024. Cristian had faced repeated attacks and had a protection scheme that proved insufficient to protect his life. These cases demand that responsibilities be clarified and that the effectiveness of prevention and protection measures be reviewed.

These risks are compounded by the limited resources of local media outlets, which hinder access to security tools, legal support, and psychosocial assistance. Institutional responses must recognize these conditions and the particularities of the

territory: protecting the press requires addressing both individual risks and the environment that allows attacks to recur.

The repeated attacks on the press show that the authorities must act before risks materialize into new attacks. Threats cannot be treated as isolated incidents, nor can the State's response be limited to assigning security schemes. An integrated strategy is needed that addresses the causes of risk, makes it possible to investigate those who seek to silence journalism, and guarantees that the media can continue to report. The lack of an effective response leaves journalists exposed and fosters self-censorship at a time when the public needs more information about what is happening in their territory.

Our Call

The severity of the violence in Cúcuta and Norte de Santander demands that the authorities act urgently and in a coordinated manner. Announcements and security councils must translate into actions that allow journalists to continue their work without risking their lives. Therefore:

- We call on the Ministry of the Interior, the Governor's Office of Norte de Santander, and the Mayor's Office of Cúcuta to adopt and implement an urgent prevention and protection plan for the press, in coordination with the UNP (National Protection Unit) and with the participation of local journalists and media outlets. The plan must have designated officials, resources, and defined deadlines, an immediate response route for threats, and public monitoring mechanisms that safeguard the sensitive information of people at risk. The authorities cannot wait for another killing to occur before responding to risks they already know about.
- We urge the National Protection Unit to prioritize the review of cases of journalists at risk in the region and to guarantee timely and appropriate measures. Assessments must take into account the territorial context, the history of violence, and the conditions in which reporting takes place. Assigning a protection scheme does not fulfill the duty of protection: it is necessary to verify its effectiveness, correct its failures, and adjust it when risk conditions change.
- We ask the Office of the Attorney General to deliver results in clarifying the killings, threats, and other attacks against the press. Investigations must treat the connection between the attacks and journalistic work as a priority hypothesis and advance in identifying those who carry out, order, and finance them. The judicial response must establish whether there are connections among the attacks and dismantle the structures that seek to silence the press.

- We urge the Inspector General's Office and the Ombudsman's Office to monitor compliance with prevention and protection commitments. We request that, within their competencies, they verify the response to alerts and complaints, identify delays or omissions, and promote the appropriate actions to prevent institutional lack of coordination from continuing to leave journalists exposed.
- We urge civil authorities and the security forces to guarantee safe conditions for covering violent events and to respect journalistic independence. This means refraining from stigmatizing those who report, avoiding arbitrary restrictions on coverage, and not exposing journalists or their sources by disclosing sensitive information.

We also call on the international community and cooperation agencies to provide sustained support to the border press, back the protection and sustainability of local media, and monitor the institutional response. This support must complement, not replace, the obligations of the Colombian State.

Why This Matters

Violence against the press affects all citizens. When a journalist is threatened, killed, or forced to stop covering a topic, the information available about public decisions, dynamics of violence, and the actions of those who hold power in the territory is restricted.

In a context like the one Cúcuta is going through, journalism is indispensable for understanding what is happening and demanding answers from the authorities. Fear cannot decide what is published or what the public is able to know.

Protecting those who report requires sustained action on prevention, protection, and access to justice. Journalists in Cúcuta and Norte de Santander must be able to do their work without risking their lives, and the public must have access to plural, independent information about their territory.